

Las segundas intenciones en la lucha contra las drogas en Colombia

ALAIN LABROUSSE

Sociólogo y periodista, presidente del Observatorio Geopolítico de las Drogas (OGD). París, Francia.

TRADUCCIÓN: Ramón Serna, voluntario de P.H. Baleares y José Antonio Jiménez, Asociación Proyecto Hombre.

En este recorrido por los lugares estratégicos del mundo conocidos por ser los mayores productores de drogas (Afganistán y la heroína, Marruecos y el cánnabis), guiados por el periodista francés Alain Labrousse, llegamos a Colombia.



Este país, que ocupa un espacio de alto valor geoestratégico en el corazón de América del Sur, es el primer productor mundial de cocaína. Y sostiene desde hace varias décadas una lucha contra la erradicación de este cultivo, y contra las FARC y los paramilitares que mantienen al país en una situación de guerra civil.

El autor centra su exposición en el Plan Colombia y el gran interés de los EE.UU debido a su situación geoestratégica, objetivos actuales

y anteriores. También, en los efectos medioambientales, económicos y sociales de las fumigaciones; la lucha contra las FARC, las negociaciones con los paramilitares y la difícil situación del presidente Uribe.

PALABRAS CLAVE: *Cocaína, narcotráfico, FARC, paramilitares, Plan Colombia.*

En el último informe del Observatorio europeo de las drogas (OEDT) se puede leer: "Sin embargo, uno puede temer que el uso de la cocaína siga extendiéndose en Europa y que los usuarios pertenezcan a los medios socialmente más diversificados"¹. En este sentido, no resulta inútil examinar las

políticas aplicadas en Colombia, un país que no sólo es, con mucha diferencia, el primer productor de cocaína sino que, desde mediados de los años 90, ha visto aumentar su cuota de producción de materia prima (hojas de coca) en detrimento de Perú y Bolivia.

EL PLAN COLOMBIA: UNA LÓGICA DE GUERRA

Los EE. UU., confrontados con la explosión de los cultivos ilícitos en Colombia, que pasaron de unas cincuenta

mil hectáreas en 1995 a 170.000 en 2001, reaccionaron con la implantación del Plan Colombia, teóricamente elaborado en colaboración con el Gobierno colombiano de Andrés Pastrana, aunque en realidad la versión definitiva fuera impuesta por Washington (por ejemplo, el Plan inicial no preveía ayuda militar). A partir de 2002, el Plan fue extendido a seis de los vecinos de Colombia con el nombre de Iniciativa Regional Andina (ARI). Tenía inicialmente por objetivo combatir el narcotráfico, apoyar las ne-

¹ EMCDDA "La Situación de los Problemas de las Drogas en la Unión Europea y Noruega. Informe Anual 2004", Lisboa 2005, capítulo V, pág.. 44-48.

gociaciones de paz que se abrieron a principios del año 1999 con las FARC y promover el desarrollo económico del país, en particular en aquellos sectores más modestos de la población. Cuando se rompieron las negociaciones de paz, en febrero de 2002 — mientras tanto se habían producido los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 — el objetivo del Plan fue combatir las “narco - guerrillas” y el “narco terrorismo”. Su coste global, hasta finales del 2004, era de 7.500 millones de dólares. La contribución del Gobierno colombiano debía ascender a 4.000 millones de dólares. Los Estados Unidos decidieron, en el momento de su lanzamiento, participar con 1.300 millones de dólares. Se esperaba que el resto fuera suplido por la cooperación bilateral y multilateral. La Unión Europea, opuesta a la lógica militarista del Plan, se negó finalmente a asociarse al mismo.

FUMIGACIÓN, ENTORNO, SALUD Y MIGRACIONES INTERNAS

Un instrumento fundamental del plan se basa en la fumigación de los cultivos ilícitos². El producto utilizado es el glyphosato, distribuido por la firma de San Luís, Monsanto, bajo el nombre de Roundup. Después de 1999, una variante de este producto ha sido perfeccionada bajo el nombre de Roundup Ultra, con añadido de Cosmo-flux 411F que incrementa la acción biológica del producto. Aplicadas a 5.600 hectáreas en 1996, las fumigaciones han abarcado 127.000 Ha. en 2003. En total, a finales de 2004, 380.000 Ha. habían sido fumigadas, co-

² Alain Labrousse “ Informe sobre la cooperación francesa con Colombia en el campo de las drogas”, OFDT/MILDT, Febrero 1982, pág. 26-27. Conviene observar que las fumigaciones fueron utilizadas contra los cultivos ilícitos en muchos países durante los años 80: Pakistán, Birmania, Guatemala y Bolivia. En todos los casos fueron rápidamente abandonadas por considerarse perjudiciales para la salud humana y el entorno.

respondiendo al 8% de las tierras cultivables de Colombia³. Las evaluaciones oficiales de los efectos de las fumigaciones fueron financiadas por el gobierno colombiano o el de los EE. UU.⁴. Pero numerosos estudios realizados por universidades independientes, ONGs e incluso por los servicios del Defensor del Pueblo (Ombudsman colombiano, nombrado por el gobierno) así como por los expertos ecuatorianos, ya que los vientos se llevan algunas veces al otro lado de la frontera los productos tóxicos, con-

Un estudio reciente y muy detallado permite hacer el balance sobre la implicación de las FARC. En total, 65 de los 110 cuerpos militares de las FARC están implicados en mayor o menor grado en el tráfico

cluyen que el Roundup afecta a la vegetación (destruyendo en algunos casos los proyectos de desarrollo alternativo próximos a las zonas de cultivo de coca) y poluciona las aguas y la capa freática. Los hospitales de las regiones afectadas señalan una recrudescencia de hospitalizaciones por problemas respiratorios y enfermedades de piel cada vez que se produce una campaña de fumigaciones⁵. Otro efecto dañino es que los nativos, expulsados de sus tierras por la destrucción de las plantaciones de coca, emigran a las regiones vecinas para de-

³ Superficies para contraponer con las 39.999 Ha. de desarrollo alternativo financiado por USAID en el mismo periodo.

⁴ Un estudio en curso por un científico americano financiado por la Comisión interamericana contra el abuso de drogas (CICAD) del que los EE. UU. son el principal financiero. Los resultados de este estudio, presentado en la primavera de 2004, se anuncian como muy favorables a las fumigaciones.

⁵ Los efectos del Roundup Ultra son agravados por el hecho de que los campesinos han encontrado paradas a las fumigaciones (lavar las hojas de coca inmediatamente después de que hayan sido afectadas o podar las plantas), por lo que los aviones pasan repetidas veces, acortando los intervalos, sobre las mismas parcelas.

fo restar la selva. De este modo, en el transcurso de los años 2000, las grandes superficies de cultivo pasaron sucesivamente de los distritos de Guaviare y de Meta, al de Putumayo, y después cuando este fue el blanco prioritario de las fumigaciones, pasaron a los de Nariño y de Caquetá. Entre 1999 y 2002, los distritos donde se cultivaba la coca se incrementaron de 12 a 22. Peor todavía, para escapar a las fumigaciones, los nativos tienden a dispersar sus cultivos en pequeñas parcelas en zonas aisladas. Fi-

nalmente, los agricultores que lo han perdido todo a la vez por el efecto de las fumigaciones, tanto los cultivos de coca como sus producciones lícitas, acaban por incrementar el número de refugiados internos que actualmente representan de 2 a 3 millones de personas. Según las ONGs especializadas, unos cien mil fueron desalojados por las fumigaciones.

Sin embargo, a corto plazo, las fumigaciones parecen eficaces. Mientras que los cultivos de coca afectaban a 163.300 Ha. en 2000, apenas si alcanzaban 86.300 en 2003. “Éxito” compensado por un nuevo incremento de las superficies ilícitas en Perú y en Bolivia.

A pesar de los esfuerzos considerables desplegados en Colombia y de la reducción de los cultivos, los precios de la cocaína son estables tendiendo a disminuir en sus dos principales mercados, Estados Unidos y Europa, mientras que la pureza de las dosis incautadas es estable o aumenta. Las autoridades americanas y los organismos especializados de Naciones Unidas (UNODOC, OICS), explican este fenómeno por la disponibilidad de existencias que serían progresivamente introducidas en el mercado por

los traficantes. A esto, los expertos⁶ contraponen que la cocaína es un producto relativamente inestable, que se oxida y que su duración de vida es de dos años, lo que no debería impedir que la política aplicada en Colombia alcanzara ya resultados evaluables. Otra explicación reside sin duda en la utilización de variedades de coca mucho más productivas para los traficantes.

LA LUCHA CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC)

La segunda parte de la intervención americana apunta a la eliminación de los grupos armados financiados gracias al dinero de la droga. Un estudio reciente y muy detallado⁷ permite hacer el balance sobre la implicación de las FARC. En total, 65 de los 110 cuerpos militares de las FARC están implicados en mayor o menor grado en el tráfico⁸. En algunas regiones, como los distritos de Caquetá, Guaviare y una parte de Putumayo y de Nariño, las FARC parecen controlar toda la cadena de producción. Pero la mayoría de los destacamentos militares de las FARC implicados en narco actividades, actúan sólo a nivel local mediante cobros de tasas sobre el cultivo de la coca o la fabricación de pasta base. En efecto, la guerrilla controla esencialmente las regiones rurales del interior del país, mientras que los puertos de la costa pacífica y atlántica por donde se efectúan las exportaciones están ya sea bajo la autoridad de las fuerzas de represión, sea bajo las para-militares.

Los vínculos entre las FARC y grupos criminales en México, en Panamá y Brasil o en Surinam, han sido denunciados

por la policía colombiana y la Drug Enforcement Agency (DEA). Si estos vínculos existen, son episódicos y no prueban la existencia de redes estables⁹. Implicarse a nivel del tráfico internacional supondría para las FARC un compromiso militar y un coste político que, probablemente, ellos no desean asumir. Las estimaciones de las rentas conseguidas por las FARC con el tráfico de drogas son extre-

Contrariamente a las FARC, los paramilitares, desde su misma creación, estuvieron íntimamente ligados a los carteles de la droga, cuando no fueron creados por ellos.

madamente aleatorias. El PNUD en su informe anual sobre el desarrollo humano en Colombia estima las rentas anuales globales de las FARC en 342 millones de dólares, de los cuales 204 millones proceden de la droga. El informe del Grupo de Crisis encuentra esta estimación exagerada y estima que las rentas obtenidas de la droga por la guerrilla no deben sobrepasar anualmente los 100 millones de dólares. Al mismo tiempo destaca que esto representa en todo caso mil millones de dólares para los diez últimos años. Una parte de estas rentas es utilizada por las FARC para reforzar su potencial militar¹⁰.

⁹ A este respecto un oficial de la DEA ha declarado ante el Congreso de EE.UU. que "no existe prueba de que ninguna unidad de las FARC o de la ELN se haya dedicado a exportaciones internacionales (de drogas), a la distribución a gran escala o al establecimiento de redes de blanqueo de dinero en los Estados Unidos o en Europa".

¹⁰ Se estima que un soldado (sueldo, alimentación, salud, mantenimiento de la familia) le cuesta alrededor de 7.000 dólares por año a la guerrilla. A continuación, invierten en la compra de armas, como lo muestra un cierto número de casos en los años 1990. Por ejemplo, a principios del decenio, se les incautó en Jamaica 10.000 fusiles, cohetes, etc., comprados en España por un importe equivalente a 10 millones de dólares. El último caso hecho público durante el año 2000, se refirió a la venta a las FARC por el asesor del ex presidente del Perú Fujimori, Vladimiro Montesinos y de militares peruanos, de un alijo de armas importadas de Jordania.

Las ofensivas llevadas por el ejército peruano en el marco del "Plan patriota" gracias a la asistencia militar de Estados Unidos; la constitución de milicias de soldados campesinos por el gobierno, han asestado golpes innegables a las FARC (en 2002, 1.683 muertos, 2.553 prisioneros, más de 1.410 desertiones en sus filas) y les han obligado a replegarse en sus asentamien-



tos de la jungla y de las montañas, pero no han mermado significativamente su potencial militar. Son capaces, como lo han demostrado a finales del mes de enero de 2005, de asestar golpes de mano muy eficaces contra el ejército colombiano a partir de sus santuarios.

LAS NEGOCIACIONES CON LOS PARAMILITARES

Contrariamente a las FARC, los paramilitares, desde su misma creación, estuvieron íntimamente ligados a los carteles de la droga, cuando no fueron creados por ellos. Según UNODOC, los paramilitares están presentes en 86 de

⁶ International Crisis Group "War and Drugs in Colombia" Latin America Report n° 11, 27 January 2005.

⁷ Ibid

⁸ Idem pp.8-12

los 162 municipios donde se cultiva la coca¹¹. Sin embargo, según la policía colombiana, no controlarían más que 30.000 Ha de coca, o sea sensiblemente menos que las FARC. En cambio, están presentes en todas las rutas claves para las exportaciones: el acceso a los golfos de Uraba y de Morrosquillos; las costas de la Sierra Nevada de Santa Marta; los puertos de Portete y de Bahía Honda en el distrito de Guajira; la región costera del Pacífico en el distrito de Valle, etc.¹². En octubre de 2004, en el transcurso de la operación



Olimpo la policía y la armada destruyeron 63 laboratorios de pasta base y de cocaína pertenecientes a paramilitares en el departamento de Cundinamarca. A nivel internacional, los vínculos fueron revelados por la DEA en marzo de 2004

¹¹ "Encuesta sobre el Cultivo de la Coca". Viena Junio 2004.

¹² Según el Observatorio de drogas de Colombia, la mayor parte de las incautaciones de más de una tonelada de cocaína que fueron efectuadas en los puertos de Tumaco y Buenaventura, en la costa del Pacífico lo fueron en las regiones controladas por los paramilitares. Estos últimos son igualmente dueños de campos de aviación, en particular en las regiones aisladas de Meta, esenciales para la importación de precursores químicos procedentes de Venezuela

en el curso de la operación Decollo, en Colombia, en España y en Italia. En particular las relaciones entre el jefe de los paramilitares Salvatore Mancuso y la "Ndrangheta, mafia de Calabria"¹³. Contrariamente a las FARC, sólo invierten una pequeña parte de los importantes beneficios generados por el tráfico internacional, en el armamento y equipamiento de sus soldados, quedando acaparado el resto a título personal por los mismos miembros de la organización.

El gobierno del Presidente Álvaro Uribe se ha decidido a negociar, en 2003 con la AUC, la rendición y la "reinserción" de sus combatientes que se evalúa en unos quince mil. Muchos observadores consideran este proceso con recelo¹⁴. Los paramilitares, todavía más que las FARC, han llevado a cabo violaciones masivas de los derechos humanos que deberían conducirles ante los tribunales nacionales o internacionales.

La guerrilla controla esencialmente las regiones rurales del interior del país, mientras que los puertos de la costa pacífica y atlántica por donde se efectúan las exportaciones están ya sea bajo la autoridad de las fuerzas de represión, ya sea bajo la de los para-militares.

cionales. Las negociaciones con los paramilitares han sido complicadas por el hecho que Estados Unidos exige la extradición de muchos de sus jefes, entre

¹³ El otro jefe de los paramilitares, Carlos Castaño, denunció la inversión de algunos frentes de las AUC en el tráfico de drogas en detrimento de la lucha contra la FARC. Este puede ser el motivo de su misteriosa desaparición en 2003, que algunos atribuyen a un ajuste de cuentas interno de la organización.

¹⁴ Por otro lado, el presidente Álvaro Uribe, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, creó él mismo milicias de auto-defensa civiles, los CONVIVIR que a menudo se transformaron en grupos paramilitares. Por otra parte, sectores importantes de la AUC aportaron su apoyo a su candidatura durante la campaña presidencial.

los cuales están Mancuso y Castaño, por tráfico de drogas. Al principio de 2005, 3.000 paramilitares habían desmovilizado sus armas sobre unos 15.000 en activo. Por otra parte, el proceso tiene efectos perversos como el hecho de que traficantes alistaron cuadrillas de paramilitares desmovilizados que han encontrado en el tráfico de drogas una fuente alternativa de empleo. De hecho, algunos barones de la droga, como Diego Montoya, el jefe del cartel del Norte del departamento de Cali, intenta negociar su impunidad buscando hacerse pasar por paramilitares¹⁵, lo que no resulta muy difícil a la vista de la imbricación de ambas actividades. Todas estas peripecias no inciden en las estrategias del Pentágono. Efectivamente la guerra contra la droga, si bien forma parte de sus objetivos, sirve igualmente para disimular intereses geopolíticos de otra índole y compensar fracasos sufridos en otros ámbitos en el continente.

LUCHA CONTRA LA DROGA E INTERÉS GEOPOLÍTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Hasta diciembre de 1999, los Estados Unidos habían esperado mantener una presencia militar en la zona del Canal de Panamá. A este fin tanteaban vender la idea de un Centro Multilateral Antidroga (CMA) con base en este país. Pero, las conversaciones con el ex presidente Balladares habían sido descu-

¹⁵ Sobre este asunto ver "La jugada de don Diego" en Revistacambio.com/articulos/3119

biertas y la nueva presidenta, Mireya Moscoso, rechazó la implantación del CMA en su territorio en nombre de la soberanía nacional. Los Estados Unidos tuvieron que recurrir a la ayuda de gobiernos más conciliadores. Asimismo las bases que coordinaban tras 80 años la política militar americana en América Latina se han red desplegado in extremis en Florida, en Puerto Rico (Isla de Vieques), en Cuba (Guantánamo), en Ecuador (Manta), en Honduras, y en las islas de Curaçao y Areba (gobierno Holandés) ¹⁶. A esto se ha añadido el hecho que el gobierno nacionalista venezolano de Hugo Chávez prohibió sobrevolar su espacio aéreo a los aviones militares de Estados Unidos. Los vecinos de Colombia se opusieron igualmente al “Plan Colombia” que, para ellos, conlleva el riesgo de exportar los problemas de ese país (guerrilla, droga y emigrantes).

En este contexto, los Estados Unidos no pueden aceptar que Colombia, que es el principal proveedor de drogas (cocaína, heroína y marihuana) del mercado americano, pero que ocupa sobre todo un espacio estratégico en el corazón de América del Sur, con una salida al mar en el Pacífico y el Caribe y con fronteras con siete países, sea entregada al caos. Además de su característica de base de retaguardia para el control geopolítico de la región, Colombia tiene otros intereses para los Estados Unidos. Uno de los proyectos de canal alternativo al de Panamá podría atravesar el norte de su territorio. Por otra parte, el Amazonas podría constituir una fuente alternativa de agua para el sur de Estados Unidos que sufre una cruel escasez. Más allá de lo que podría calificarse como “suputaciones”, existe un ámbito en el que resulta claro que el plan Co-



Esta militarización de la lucha contra la droga liderada por el gobierno de Álvaro Uribe y los Estados Unidos, además de revelarse de una dudosa eficacia, no ataca a las verdaderas raíces de la violencia.

lombia sirve de pantalla de humo para enmascarar otros intereses: a finales de 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la entrega de 99 millones de dólares a la armada colombiana para proteger el oleoducto de Caño Limón-Coveña (cuya mayoría de acciones está en posesión de las compañías americanas Ecopetrol y Occidental Petroleum), a lo largo de la frontera venezolana, en el distrito de Arauca. Decenas de instructores militares —el Congreso autorizó la presencia en Colombia de un máximo de 500 soldados US y 300 miembros de sociedades privadas de seguridad— refuerzan a este fin la 18ª Brigada y la 5ª Brigada móvil ¹⁷. Esta militarización de la lucha contra la droga liderada por el gobierno de Álvaro Uribe y los Estados Unidos, además de revelarse de una dudosa eficacia, no ataca a las verdaderas raíces de la violencia. Por ejemplo, la ausencia de la reforma agraria en este país

que hace que el 1,3 % de la población colombiana sea dueña del 48% de las mejores tierras. En cuanto a las FARC reclutan a jóvenes campesinos que no tienen otra perspectiva que alistarse en uno u otro de los bandos beligerantes ¹⁸. En este contexto, le cuesta hacerse entender a la sociedad civil, ansiosa de paz. Sigue sosteniendo mayoritariamente al presidente Uribe (a pesar de la advertencia que ha supuesto el éxito de candidatos de izquierda en las elecciones locales del 25 de octubre de 2003) en la creencia que su política voluntarista permitiría restablecer la paz y la seguridad en el conjunto del país como lo ha conseguido en las grandes ciudades de Colombia y a lo largo de las grandes vías de comunicación. Si se llegara a comprobar que las concesiones hechas por el pueblo a nivel de las violaciones de los derechos humanos y del ataque al medio ambiente han sido vanas, los electores podrían apartarse de él cuando está intentando solicitarles para un segundo mandato.

¹⁷ Si el oleoducto fue objeto de numerosos ataques, ha sido por parte del Ejército de Liberación Nacional, respecto del que todos los observadores coinciden en afirmar que no está prácticamente implicado en las actividades relacionadas con la droga.

¹⁸ Por otra parte, los desertores que pasan de uno a otro de estos dos bandos no escasean.

¹⁶ Transnational Institute “Forward Operation Location in Latin America: transcending Drug Control”, *Drugs & Conflict*, debate papers, September 2003, N° 8.